

## Los socialistas de Ferrol se oponen a una piscifactoría propuesta por el bipartito

Pesca admite que algunas ubicaciones ofrecidas al sector pueden incumplir la normativa

SONIA VIZOSO, Santiago  
En el listado de terrenos que la Consellería de Pesca propone a las empresas de acuicultura para construir piscifactorías se incluye la zona de Ponzos, un tramo de

costa virgen ubicada en el municipio de Ferrol. La posibilidad de que se levante en esta zona una granja marina ha provocado ya la oposición de las asociaciones ecologistas y del PSOE ferrolano. El candidato a la alcaldía por este partido y actual

presidente del ente autonómico Portos de Galicia, Vicente Irisarri, destaca el "valor ecológico incalculable" de Ponzos y asegura que el bipartito paralizará el proyecto.

"Ponzos tiene unas aguas tan limpias que dan ganas de beberlas". El candidato del PSOE en las elecciones municipales de mayo está convencido de que su partido no va a "destruirla" un paraje "inigualable" como el de Ponzos construyendo allí una piscifactoría. Vicente Irisarri asegura que la Consellería de Pesca ya le ha tranquilizado. "Me han dicho que si la zona reúne estas características que yo digo, no se pondrá la piscifactoría", explica el actual presidente de Portos de Galicia, un organismo dependiente de la Consellería de Política Territorial. "Este tema ha dejado de preocuparme".

La Consellería de Pesca admite que el borrador del Plan Galego de Acuicultura que se le ha mostrado a los empresarios del sector es un "catálogo de terrenos" que deberán superar los controles de diversos departamentos, tanto de la Xunta como del Gobierno central. Una portavoz de Pesca señala que se seleccionaron una veintena de espacios "fuera de Red Natura" que "en principio son medioambientalmente aptos", pero que pueden resultar finalmente "inviabiles" por temas urbanísticos, medioambientales o de conservación de patrimonio.

El departamento que dirige la socialista Carmen Gallego eludió ayer aclarar si el emplazamiento de Ponzos, en Ferrol, está entre las ubicaciones del plan que se piensan descartar, tal y como asegura el candidato del PSOE a la alcaldía de Ferrol. Pesca afirma, eso sí, que las empresas del sector ya han sido advertidas de que no es seguro que todos los enclaves pro-



Zona de Ponzos, en el municipio de Ferrol, donde se plantea la construcción de una piscifactoría. / GABRIEL TIZÓN

puestos cumplan la legislación.

El proyecto que plantea la Xunta para construir una granja marina en Ponzos está promovido por la empresa Isidro de la Cal. Vicente Irisarri considera que se trata de una compañía "sólida y si se le proponen otras alternativas las aceptará". "El PSOE está a favor de la acuicultura", añade, "pero es necesario hacer un esfuerzo de búsqueda de espacios adecuados". El aspirante socialista a alcalde ferrolano cree "inexplicable" que el gobierno local de

la ciudad, en manos del PP y de Independientes por Ferrol, haya aplaudido el plan para construir la piscifactoría.

Ponzos está enclavado entre cabo Prior y punta Ferruxeda y forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Costa Ártabra. Según la Sociedade Galega de Historia Natural se trata además de una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) incluida en la Red Natura y cuenta con "importantes comunidades vegetales", sistemas dunares y acantilados.

"Todo el conjunto tiene un gran valor ecológico y paisajístico", subrayan los ecologistas, "ya que ésta es una de las zonas litorales mejor conservadas de la costa gallega, con escasa presencia humana y urbanística". La Sociedad Galega de Historia Natural pide a la Xunta que no permita instalar en este paraje "una macroedificación de hormigón, tanques, tubos, canalizaciones, bombas y productos químicos, una industria que, como tal, para producir, consume y contamina".

## La plantilla de Elnosa se moviliza contra el gobierno de Pontevedra

LARA VARELA, Pontevedra  
Los trabajadores de Electroquímica del Noroeste, S A, (Elnosa), dedicada a la producción de cloro, han trazado un calendario de "movilizaciones sorpresa" ante la posibilidad del cierre de la firma como consecuencia de lo que ellos consideran un boicoteo del bipartito BNG-PSOE que gestiona el ayuntamiento pontevedrés.

El presidente del comité de empresa, Jaime Iglesias (Comisiones Obreras), afirma que el gobierno local emitió en julio de 2006 un informe desfavorable para la compañía, alegando que una serie de edificaciones y ampliaciones de la fábrica son de carácter ilegal. En base a este documento, que es de carácter vinculante, la Consellería de Medio Ambiente "mira para otro lado" y remite un escrito en el que deniega la autorización necesaria para que la actividad industrial se acoja a la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que requiere a las empresas anteriores a su entrada en vigor (3 de julio de 2002) disponer de una autorización con el fin de controlar la contaminación.

El hecho es que si en octubre de este año Elnosa no dispone del expediente correspondiente, que necesita de un informe municipal favorable, deberá dar por finalizada su actividad industrial. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la empresa, sostiene que "el Ayuntamiento ha actuado a mala idea" y asegura que se está utilizando a los trabajadores como un arma electoral. "Después de que el BNG dijera durante tantos años que Elnosa contamina y es una bomba en potencia, ahora van y hacen un informe de tipo urbanístico para que se vaya de aquí". Y añade que "lo hacen así porque la fábrica se acoge a la normativa vigente en materia de contaminación y ellos lo saben".

### Sin respuesta

El malestar de los 80 trabajadores de la plantilla se debe también a que ni el alcalde nacionalista, Miguel Anxo Fernández Lores, ni la portavoz socialista, Teresa Casal, ni los titulares de las consellerías de Industria y Medio Ambiente les han atendido tras solicitarles el pasado mes de octubre una entrevista para tratar de resolver este conflicto. "Todavía no sabemos nada, lo mismo que de todas las promesas electorales que escuchamos hace dos años, antes del cambio de gobierno", dice.

La empresa, propiedad del grupo luso José de Mello, que la compró a ENCE en 2002, presentó inicialmente un recurso administrativo en el que argumenta que disponen de licencia municipal y que su ubicación es compatible con el planeamiento. El pasado mes de septiembre, tras recibir el escrito del Ayuntamiento, interpuso una demanda.

Iglesias matiza que este proceso de garantía ambiental tiene su origen en un acuerdo de carácter voluntario que las empresas electroquímicas españolas firmaron con el Ministerio de Medio Ambiente y los departamentos autonómicos en marzo de 2006.

## El alcalde de Ribadeo declara ante la juez por autorizar una granja marina

S. VIZOSO, Santiago  
La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Mondoñedo ha tomado declaración al alcalde de Ribadeo, Balbino Pérez Vacas (PSOE), por la licencia de obras que concedió para que la empresa Acuinor construya una piscifactoría en Rinlo. El proyecto de esta granja marina de rodaballos y pulpo fue aprobado por el Gobierno del PP el 28 de julio de 2005, cuando ya había perdido las elecciones y estaba sólo en funciones. Justo al día siguiente de esta decisión del Ejecutivo de Manuel Fraga, el regidor ribadense dio el permiso municipal para que la promotora empezara a levantar la planta.

La asociación ecologista Adega presentó una denuncia contra Pérez Vacas en la que le acusa de

haber concedido una licencia ilegal a la promotora de la granja, ubicada en zona protegida. El colectivo argumenta que el gobierno de Ribadeo le otorgó el permiso sin esperar siquiera a que la aprobación definitiva del proyecto fuera publicada en el *Diario Oficial de Galicia*, por lo que no respetó el periodo de exposición pública. Según los denunciantes, el alcalde tampoco aguardó a recibir las autorizaciones de Costas y de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

La juez que instruye el caso les tomó el martes declaración como imputados al alcalde, al secretario, Manuel Díaz Sánchez, y al arquitecto municipal, Francisco Manuel Moreda Gil. Pérez Vacas, que gobierna en coalición con el BNG, defiende que la li-

ciencia de obras de la piscifactoría "está bien dada", porque se limitó a recoger la ubicación marcada por la anterior Xunta. El regidor asegura que otorgó el permiso justo al día siguiente de que el equipo de Fraga diera el visto bueno al proyecto porque "tenía todos los informes favorables y empezaba el verano". Según su versión, la autorización estaba condicionada a que la granja marina obtuviera el resto de permisos preceptivos con los que no contaba en aquel momento.

Adega asegura que, para ubicar la planta de Rinlo, la anterior Xunta le vendió terrenos a la promotora a un euro el metro cuadrado. Las parcelas, señalan los denunciantes, formaban parte de un fondo de tierras procedente de la concentración parce-



Balbino Pérez Vacas.

laria. Los ecologistas sostienen que la empresa, propiedad de Ramón Álvarez-Cascos, pariente del ex ministro de Fomento, recibió un "inaceptable trato de favor" por parte del Gobierno del PP y exigen al bipartito que la paralice como hizo con la planta de Pescanova en Touriñán.